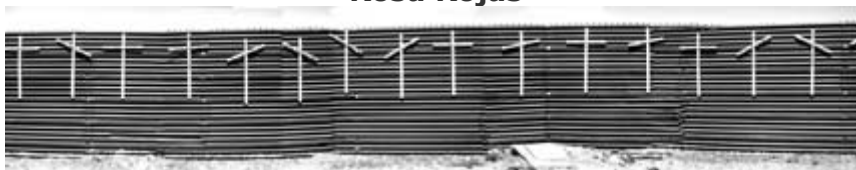




Mujeres las más vulnerables México, frontera de represión y sufrimiento para migrantes indocumentados

- Se les infiere el mismo maltrato que EU da a mexicanos sin visa
- Más de un 80 por ciento de mujeres sufre abuso sexual

Rosa Rojas



"Uno sabe de los riesgos, como no, pero en ver la situación que uno tiene, uno se decide a todo, a morir y todo" afirmó Gladys, salvadoreña, originaria de San Miguel, entrevistada en la Estación Migratoria de Iztapalapa (EMI), en el Distrito Federal.

Viuda, de 33 años, ella dejó a sus hijos de 14, 10, 9 y 7 años a cargo de su madre, decidida a llegar a Houston, Texas, Estados Unidos, donde un hermano ya le tenía un trabajo en una panadería. Salió el 10 de julio de El Salvador, cruzó Guatemala, en autobús. En Tecún Umán, ciudad guatemalteca fronteriza con México, se salvó de un asalto, pero al correr perdió sus papeles.

Gladys viajaba con un grupo guiado por un "pollero de confianza", que le iba a cobrar 5 mil 500 dólares –ya le había pagado la mitad- por sus servicios. Dormían hacinados en hoteles. En la carretera, antes de los retenes –de migración, militares, de judiciales-, se bajaban del autobús, caminaban durante horas por el monte para eludir el retén y más adelante abordaban otro autobús. A ella y sus compañeros los detuvieron por el 9 de agosto cerca de Saltillo, Coahuila. El "pollero", que viajaba en otro autobús, los había enviado por delante. De cinco mujeres entrevistadas en la EMI, tres habían escuchado de centroamericanas que habían sufrido abusos sexuales: una, había sido violada por 6 delincuentes que se subieron al tren en el que viajaba; otra, que contó "que un federal la agarró y no la dejó ir y tuvo que quedarse una noche con él"; Gladys misma, que no reconocía como acoso sexual que sus compañeros de grupo le hubieran estado insistiendo en que durmiera con ellos. A otra compañera, asaltantes que se subieron al tren le habían cortado la mitad del pelo en represalia por no llevar dinero.

Gisela, hondureña de la ciudad de Cholulteca, soltera, de 28 años, dejó a sus hijos de 9, 7 y 3 años con su mamá. Viajaba con un grupo de cuatro hombres. En Guatemala les pidieron dinero para dejarlos pasar "a los policías sólo les interesa que pague uno"; antes de llegar a San Luis Río Colorado, Sonora, los detuvo la "policía federal (llevaban uniformes de pantalón azul), ahí los tuvieron algunas horas interrogándolos, les quitaron los zapatos y finalmente los entregaron a migración.

Cada año, decenas de miles de mujeres centroamericanas indocumentadas –guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas, nicaragüenses- intentan cruzar los cuatro mil kilómetros de territorio mexicano que las separan de Estados Unidos con la esperanza de poder trabajar allá. En ese largo recorrido muchas son objeto de malos tratos, extorsiones, irrespeto a sus derechos humanos y abusos sexuales, incluyendo violación, perpetrados lo mismo por autoridades mexicanas –incluyendo militares- que por delincuentes. Hay discusión respecto a la dimensión del abuso: la coordinadora de la Corporación Corazón (COCOAC), Liliam Jiménez, entrevistada en Tijuana, Baja California, señaló que entre 80 y 90



por ciento de las mujeres indocumentadas que logran cruzar los filtros de los retenes policiacos, militares o migratorios en ese transitar hasta la frontera norte de México, han sido víctimas de abuso sexual. Fabienne Venet, directora de Sin Fronteras, sin atreverse a dar un porcentaje, ratificó que "sí hay una problemática importante de abuso contra las mujeres migrantes". El sacerdote Francisco Pellizari, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua, entrevistado en aquel lugar, confirmó que los reportes de esos abusos recibidos afectan a "más o menos el 90 por ciento" de las migrantes.

"Nosotros lo que hemos visto -dijo Venet- es que cuando viajan en grupos muchas veces tienden a ser abusadas; a veces son utilizadas un poquito como pago para el paso. Cuando los grupos son detenidos por algún tipo de autoridad, pues se cobran a veces con las mujeres, con o sin el consentimiento del grupo. Hay mujeres que han reportado que a veces el propio grupo proponía el asunto, a veces trataban de protegerlas. Hay diferentes tipos de abuso sexual y pueden llegar a la violación o no. Las mujeres que tienen más recursos, más educación, están tratando de utilizar otras vías de viaje para evitar ese tipo de riesgos, pero no son todas".

Tres de las migrantes entrevistadas dijeron que al llegar a su país esperarían unos días para reintentar llegar a Estados Unidos. Se quejaron de que en la EMI, las vigilantes "son muy malas" y las trataban "como si uno hubiera matado". Invisibles -tanto que ni en las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) se consigna el sexo de las 119 mil 858 personas expulsadas de México hasta agosto- las indocumentadas centroamericanas pueden representar -según cálculos de la embajada de Guatemala en México- hasta el 30 por ciento de la diáspora que está vaciando de la fuerza vital de sus jóvenes a pueblos y ciudades de la región. Como ocurre en México, se sabe que la gente emigra porque en sus lugares de origen van quedando ancianos y niños. Y por un dato que sí tienen bien controlado los gobiernos: los migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que radican en Estados Unidos envían, según el Banco Interamericano de Desarrollo, 4 mil 800 millones de dólares anuales en remesas. Una de cada cuatro personas de los citados países se beneficia de ese flujo monetario.

Ya en las ciudades de la frontera norte, tanto Pellizari, como la hermana Gema Lizzot, responsable del Centro Madre Assunta de Tijuana, estimaron que un 20 por ciento de las personas que atienden son centroamericanos. Tanto en la Casa del Migrante -que recibe a hombres- como en el Centro Madre Assunta, para mujeres, se les proporciona alojamiento y comida durante un máximo de 15 días, tiempo suficiente para que consigan un trabajo en lo que logran -o no- cruzar la frontera estadounidense.

En el caso del flujo de trabajadores agrícolas guatemaltecos documentados, la investigadora Martha Luz Rojas, de El Colegio de la Frontera Sur, apunta en su artículo del libro "Migración: México entre sus dos fronteras" editado por el Foro Migraciones 2000-2001, que se estima que las mujeres reciben el 16 por ciento de los permisos de trabajo otorgados por el INM. Por otra parte, se calcula que 90 por ciento de las trabajadoras domésticas de Tapachula, Chiapas, son extranjeras, la gran mayoría guatemaltecas, algunas de las cuales sólo perciben 300 pesos al mes, informó Venet. También en esa ciudad hay una gran cantidad de sexoservidoras centroamericanas que, dentro de su proceso migratorio, trabajan un tiempo en esa actividad para obtener recursos para el viaje a Estados Unidos.

Que no haya disponibles al público cifras desagregadas por sexo, es al parecer, una omisión deliberada del INM, porque la información existe. Al menos en el cuadro sobre "repatriación por punto de entrada" que proporcionó a esta reportera en Tijuana, el responsable de Comunicación Social de la delegación en Baja California, Raúl Zárate Rivera, tanto la información de adultos como de menores repatriados de enero a julio de 2003 está desagregada por sexo. En total, de 136 mil 215 repatriados en ese lapso, por las cinco garitas que hay en esa entidad, 115 mil 524



fueron hombres adultos y 17 mil 622 (15.25 por ciento) mujeres. De los menores, fueron 2 mil 6 hombres y mil 63 mujeres.

Zárate Rivera, con quien las enviadas de La Jornada, realizamos un recorrido por la zona del bordo del río Bravo, acompañando al agente Oscar Alemán, del grupo Beta, detalló que del total de repatriados, hubo mil 100 centroamericanos. Los agentes del grupo Beta no andan armados, su misión es rescatar y orientar a los migrantes, sin importar su nacionalidad, indicó. Sin embargo, Pellizari, Jiménez, Lizzot y otras personas entrevistadas, coincidieron en que ha cambiado la forma de actuar de los Beta.

Hay quejas porque incluso los mismos agentes llegan a entregar indocumentados al INM, lo que es indebido. Pellizari refirió haber recibido quejas de extorsión por parte de agentes de ese grupo.

Patricia Sánchez, responsable del departamento de Atención al Migrante del DIF municipal de Tijuana, informó por su parte que los policías municipales maltratan incluso a los repatriados mexicanos "porque los confunden, entre comillas, con indocumentados centroamericanos y los extorsionan o los levantan, les roban lo que traen y se los entregan al juez, los acusan de vagancia, los meten a la cárcel". El DIF le da a los migrantes mexicanos credenciales de identificación por un mes, para que no los detengan y les consigue descuentos en pasajes para volver a su lugar de origen. De acuerdo a las estadísticas del INM, en 2002 hubo 110 mil 573 extranjeros indocumentados devueltos a sus países de origen. En cambio, sólo de enero a agosto de 2003 ya iban 119 mil 858, de los cuales 46.9 por ciento -56 mil 252- son de Guatemala; de Honduras, 40 mil 381 -33.7 por ciento-; de El Salvador, 19 mil 447 -16.2 por ciento-; de Nicaragua, mil 432 -1.2 por ciento-. De Brasil, 578 -0.5 por ciento- y de Ecuador, 543 -0.5 por ciento-. De otros países, hubo mil 225, devueltos, entre ellos 141 estadounidenses. Sin embargo, esas cifras son sólo la punta del iceberg: se estima, por ejemplo, que unos 300 mil guatemaltecos -hombres y mujeres- cruzan indocumentados el país cada año rumbo a Estados Unidos (La Jornada, 15 de febrero de 2002), es decir, se intercepta y devuelve un 12.6 por ciento de los indocumentados de ese país.

De polleros confiables a mafias de traficantes de personas

El director del Centro Binacional de Derechos Humanos -con sede en Tijuana- Víctor Clark Alfaro, activista y estudioso de los fenómenos migratorios desde que en los 80 colaboraba con el movimiento Santuario en el ferrocarril subterráneo que ayudó a escapar de la represión en Guatemala y El Salvador a unas 500 personas -un 50 por ciento mujeres-, comentó que no se le ha dado el debido reconocimiento a los guías o polleros, que prestaron invaluable servicios a los migrantes, que los cuidaban. Ahora están siendo sustituidos por mafias de traficantes de personas, muchos de ellos sin experiencia, que no conocen los cada vez más peligrosos puntos de cruce, a los que sólo les interesa el dinero y que a la primera dificultad abandonan a los migrantes.

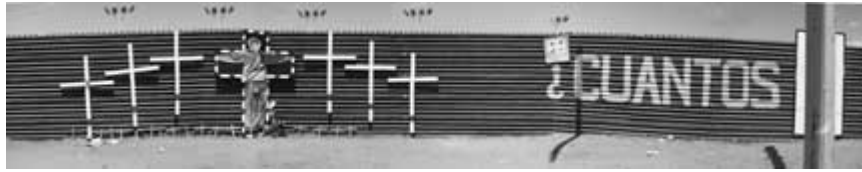
Pellizari, Lizzot, Jiménez, Venet, coincidieron -por separado- en que entre los problemas fundamentales que México debe enfrentar respecto al fenómeno de la migración es el combate a las causas: la pobreza, la falta de oportunidades en los países centroamericanos como en las regiones expulsoras de migrantes de nuestro propio país. Se debe cambiar, además, el enfoque criminalizador contra los migrantes, así como el tema de seguridad, que puso en la agenda de los países latinoamericanos Estados Unidos después del 11 de septiembre y que México ha incluido en su discurso migratorio, apuntó Venet. Jiménez subrayó además que debe modificarse el artículo 33 constitucional, que al permitir expulsar a un extranjero "sin necesidad de juicio previo", viola el acceso a la justicia y debido proceso.

(ver [recuadro](#))

El concepto de que el indocumentado es un criminal y como tal debe ser tratado se refleja en la arquitectura de la nueva estación migratoria de Tijuana: rejas altas, hechas de gruesos tubos, que repiten el diseño de la segunda barda que los estadounidenses instalaron paralelamente a la primera barda metálica, oxidada, construida originalmente para tratar de frenar a los indocumentados. No hay libre salida al patiecito trasero. No hay camas, sólo una plancha de cemento adosada a las paredes para que ahí se sienten o recuesten los que habrán de ser expulsados.

Como señala el Foro Migraciones en su libro arriba citado: claramente la política de violencia institucionalizada impuesta por Estados Unidos en su frontera con México, que en sí misma vulnera la seguridad y los derechos humanos de los migrantes que la cruzan, está siendo

implementada por nuestro país en la frontera sur, por lo que ahora ambas “se han convertido en fronteras de represión, de sufrimiento y de muerte”.



En la barda metálica que marca la frontera México-EU en Tijuana, Baja California, la Coalición pro Migrantes coloca una cruz por cada migrante muerto/a, en protesta porque desde 1994, con la Operación Guardian el número de muertes se incrementó 400 por ciento. **Fotos: Ximena Bedregal**

Triple Jornada No 62-- Octubre del 2003

http://www.jornada.unam.mx/2003/10/06/titls_articls.htm